Globethics Repository



El Salvador [El Salvador]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Molina y Vedia, Eduardo
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-15 01:55:55
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/221254

Nueva Sociedad Nro.101 Mayo- Junio 1989, pp. 6-14

EL SALVADOR incógnitas y espejismos en el camino de arena

Molina y Vedia, Eduardo

Eduardo Molina y Vedia: Periodista argentino. Corresponsal en México y Centroamérica de la revista argentina Utopías del Sur. Fue director de la edición en español de Le Monde Diplomatique, que se editaba en la capital mexicana.

Una nueva fase de polarización se abrió con el triunfo de la extrema derecha en los comicios escenificados en El Salvador el 19 de marzo de 1989. El fenómeno expresa el predominio de la dinámica endógena del conflicto centroamericano (del que el drama salvadoreño sigue siendo, sin duda, el núcleo estructurante) sobre los acuerdos globales de distensión mundial y regional que pretenden encuadrar su encauzamiento por vías conciliatorias.

La asunción de la presidencia el 1° de junio de 1989 por Alfredo Cristiani de 42 años, miembro prominente de la oligarquía y representante del Partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), amenaza con alterar o entorpecer drásticamente los planes de la diplomacia norteamericana en la región y pone en tela de juicio los cruciales acuerdos pacificadores alcanzados en la cumbre de mandatarios de América Central, reunida el 14 de febrero de este año en San Salvador.

Allí se había fijado un plazo de 90 días para definir un plan de desmovilización de las fuerzas antisandinistas, que desde hace ocho años operan militarmente contra Nicaragua a través de sus fronteras, en particular desde territorio hondureño. Pero el promisorio silencio inicial de la flamante administración Bush - cuyo nuevo pragmatismo imperial, dictado por los cambios en la liza internacional y por los reveses de la guerra fría reaganeana, generaron apresuradas ilusiones aperturistas - se quebró el 25 de marzo (a los pocos días de la victoria de Cristiani) mediante el anuncio, efectuado en directo por el jefe de la Casa Blanca, de un acuerdo bipartidario (de demócratas y republicanos) a fin de sostener a la «contra» con un total de 45 mil millones de dólares hasta febrero de 1990, tras el objetivo cínicamente declarado de amenazar, presionar y sabotear al proceso revolucionario sandinista, que tiene previstas elecciones generales para esa fecha. La guerra de desgaste contra Nicaragua continúa, pues, representando una carta vigente en el área centroamericana.

Lo cierto es que en el decisivo escenario salvadoreño, donde el gobierno de EEUU y sus aliados libran una lucha cada vez más desesperada por establecer una línea de contención contra el avance de las gestas liberadoras, todo el dispositivo político-militar del imperio vio trastornadas de raíz sus bases de sustentación y la consistencia de su discurso. Las felicitaciones de Bush a Cristiani y su invitación a que visite rápidamente Washington no alcanzaron a ocultar la amenaza que representa, según lo señaló John Goshko el 24 de marzo en The Washington Post, para «la búsqueda de una política bipartidaria (en EEUU) hacia Centroamérica». Charles Redman, vocero del Departamento de Estado, fue igualmente explícito: «Nuestra relación con el nuevo gobierno dependerá de su adhesión y respeto a los derechos humanos».

Un poco de historia

Arena, en efecto, representó desde su creación, a comienzos de los 80, una fuerza ligada a la guerra sucia y a las tareas represivas más despiadadas contra el pueblo y sus militantes. Su fundador y líder, el mayor Roberto D'Aubuisson, secundado por sectores de la cúpula de las fuerzas armadas, cuya cabeza visible es el coronel Sigfrido Ochoa Pérez, organizó y coordinó los cruentos «escuadrones de la muerte» que asolaron al país y obligaron a Reagan - bajo presión del Congreso, mayoritariamente demócrata - a quitarle su apoyo y orientarlo hacia la Democracia Cristiana del actual mandatario saliente José Napoleón Duarte, desahuciado desde hace un año por un cáncer terminal hepático. Fue una laboriosa empresa político-diplomática, respaldada por la represión militar y regada con abundantes subsidios y sobornos (que en los casi nueve años que lleva el conflicto superan ya los 3.500 millones de dólares), poner en marcha un proyecto de fachada reformista y democratoide con la instalación de Duarte en la presidencia durante el año 1984. El operativo requirió la realización de un claro fraude electoral contra Arena y su candidato, el mayor D'Aubuisson, dentro de unos comicios que ya eran en su conjunto un escandaloso engaño propagandístico. Paralelamente, Reagan intensificaba su guerra terrorista de desgaste contra Nicaragua.

Más de ocho años de escalada belicista en El Salvador (que dejaron un saldo de 70 mil muertos, medio millón de exiliados, una cifra similar de desplazados internos e ingentes daños materiales, con el resultado de una economía en quiebra, agravado por el sismo de 1987) no mejoraron la situación para los intereses norteamericanos.

Por el contrario, las guerrillas del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) ampliaron y consolidaron sus posiciones, ganando incluso terreno en la

lucha de las organizaciones de masas, a través de la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños, el Comité de Madres, la Comisión de Derechos Humanos, la Universidad y las agrupaciones de campesinos.

La Democracia Cristiana, en el gobierno, defraudó las tenues expectativas que en su momento había despertado en algunos sectores de las clases medias urbanas y en la población rural sin tierras. La guerra, las trabas que opusieron las fuerzas armadas y la oligarquía agrupada en torno a la Arena, la dependencia de EEUU, su propia ineptitud y la corrupción generalizada en que terminó sumergiéndose cavaron la tumba de su proyecto. La victoria de Cristiani, anticipada por el triunfo de Arena en los comicios legislativos de 1988, resultaba así imposible de evitar sin un golpe de Estado.

La propuesta lanzada en enero por el FMLN para postergar las elecciones hasta septiembre, rodeándolas de garantías de legitimidad inaceptables para el régimen, buscó potenciar y coherentizar su relación con sus aliados de Convergencia Democrática, que bifurcando las tácticas del frente rebelde se presentaron por primera vez a las urnas, con el social demócrata Guillermo Ungo de candidato. Pero pese a su proclamada confianza en que la modificación de las condiciones de la consulta permitiría la victoria de la Convergencia Democrática (CD), categóricamente desmentida por las cifras del 19 de marzo, la propuesta del FMLN - motivo de varias e infructuosas sesiones negociadoras en México y El Salvador - cumplió un rol fundamentalmente propagandístico: dejar sentado frente a la opinión pública mundial y ante un pueblo harto de una conflagración sangrienta e interminable, que la guerrilla busca el diálogo y una salida política negociada, capaz de reducir los sufrimientos y los costos sociales y humanos de la lucha. Al explicar su contraste electoral (The New York Times, 25/3/89), Ungo dijo que su campaña «fue una de las bajas de la guerra» y admitió «por ahora, no hay posibilidad alguna de desempeñar un papel favorable en el sistema desde la izquierda, a menos que haya paz». Con menos del 4% de los votos (y aun teniendo en cuenta el fraude en su contra que denunció), el candidato de la CD estuvo lejos del 10% esperado y calificó de «grave error táctico» el boicot activo del FMLN a los comicios, al que culpó de su fracaso. Lindsay Gruson, columnista del Times, sostuvo que aunque no distinguió su discurso del de la izquierda guerrillera, Ungo «no logró que se lo considerara un político que confiere legitimidad al sistema democrático, sino que terminó incluso siendo cuestionado como líder del frente rebelde».

La farsa electoral

En medio de un intensificado accionar insurgente, que bloqueó totalmente el transporte, dejó sin agua, electricidad ni combustible a casi todo el país y libró intensos enfrentamientos armados con las fuerzas gubernamentales, la jornada electoral arrojó magros resultados políticos para el régimen. Junto con la gigantesca cifra récord de ciudadanos que no votaron - ya sea por no haberse inscrito en el padrón (200 mil), por no haberlo hecho a tiempo (400 mil) o por no haber concurrido a sufragar (950 mil) -, un gran revés para el régimen lo constituyó la masiva reacción de repudio en escala mundial despertada por el asesinato el día de la votación, a manos de los militares, de tres trabajadores de la prensa (un holandés y dos salvadoreños), mientras otro, también de nacionalidad salvadoreña, era gravemente herido. El ataque a los medios, que elevó a quince el número de bajas fatales sufridas por el gremio de la prensa en el curso de la guerra salvadoreña, ilustró el temor de las fuerzas armadas (verdadero pilar del sistema vigente) ante el poder concientizador de la información, cubriendo de sangre, luto e indignado repudio la cobertura periodística del evento electoral. Nadie creyó en las «circunstancias accidentales» de las muertes, alegadas por los militares, puesto que la hostilidad y la conducta amenazante y criminal hacia la prensa ha sido una constante de las fuerzas armadas salvadoreñas en la última década.

Cuadro 1

El Salvador: Votación y porcentajes por partidos en los comicios del 19.03.89.

Partido	Votos	% de los votantes	% del padrón electoral	% del cuerpo electoral
Arena	510.000	53	26	20
Democracia Cristiana	340.000	36	18	13
Partido de Conciliación Nacional	38.000	4	2	1,54
Convergencia Democrática	36.000	3,8	1,88	1,43
Movimiento Auténtico Cristiano	9.000	0,96	0,48	0,36
Unión Popular	5.000	0,48	0,24	0,18
Acción Democrática	4.000	0,46	0,23	0,17
Acción Renovadora	3.000	0,34	0,17	0,12
Blancos y nulos	..... No se dieron cifras			

En el campo de los números, y pese a la manipulación tergiversadora de porcentajes y totales, al régimen salvadoreño y a sus mentores norteamericanos no les fue mucho mejor.

De los 2.500.000 ciudadanos en condiciones de votar (el cuerpo electoral), sólo 1.900.000 (76%) dispuso del carnet requerido para sufragar y apenas votaron efectivamente 950.000 (49% del padrón y 37% del cuerpo electoral potencial). Así, una clara mayoría de la población con derecho al voto estuvo ausente de los comicios: 1.550.000 ciudadanos (63% del cuerpo electoral).

De acuerdo con los datos oficiales - denunciados como fraudulentos por la Convergencia Democrática - la distribución de los sufragios y los respectivos porcentajes en relación con el total de votantes aparece en el Cuadro 1.

Las cifras de votos en blanco y anulados no fueron suministradas por las autoridades, dando lugar a denuncias de la Convergencia Democrática y de observadores independientes, en el sentido de que sirvieron para engrosar el caudal de Arena y también del PCN, en este último caso con el fin de ubicarlo en el tercer lugar y evitar así el ingreso de representantes de la CD en el futuro Consejo Central de Elecciones.

Otras anomalías denunciadas fueron la realización de campaña proselitista el día de los comicios por Arena y la DC, la presencia intimidatoria de efectivos de las fuerzas armadas en los lugares de votación, el sufragio múltiple de partidarios del candidato ganador y el hostigamiento a los vigilantes (fiscales de casilla) de la Convergencia Democrática.

Un país en quiebra

Con 5.500.000 habitantes hacinados en escasos 21 mil kilómetros cuadrados y más de un 60% de analfabetismo, sumido en una guerra revolucionaria prolongada de consecuencias material y moralmente devastadoras, El Salvador vive la bancarrota de sus dos economías paralelas: la bélica y la comercial.

Cristiani, descendiente de una dinastía de grandes propietarios de tierras y próspero empresario cafetalero, anuncia un plan de privatización financiera y agraria como panacea para la parálisis productiva, el déficit presupuestario, el agotamiento de las reservas de divisas (limitadas a apenas 238 millones de dólares) y la fuga de capitales, que en 1988 redujo en 65 millones de dólares el tesoro nacional. EEUU invierte diariamente en El Salvador un millón y medio de dólares, pero su casi totalidad se consume en una guerra contrainsurgente sin perspectivas, que ha llegado a un punto de estancamiento crónico, mientras las masas populares continúan

hundidas en la miseria, golpeadas por el genocidio y agobiadas por el desempleo, el desplazamiento forzoso a causa del conflicto bélico y la carestía.

Los ataques guerrilleros contra objetivos económicos del régimen desde 1980 han causado daños que se calculan en unos 2.000 millones de dólares, además del deterioro progresivo (aún sin calcular) de las redes eléctrica y telefónica, blanco de constantes ataques rebeldes.

Si en algo coinciden todas las fuerzas políticas y sociales salvadoreñas es que no hay visos de solución para ninguno de los problemas básicos del país mientras dure la guerra, pero las condiciones planteadas por los dos grandes sectores en pugna (el bloque en el poder y el frente democrático-revolucionario) son tan diametralmente contradictorias e inconciliables que amenazan con dilatar indefinidamente el enfrentamiento bélico. Un pueblo empobrecido y agotado exige una salida política negociada y compromete a todo el espectro institucional a renovar permanentemente sus protestas de vocación pacifista y voluntad de diálogo.

No puede entonces sorprender que inmediatamente después de los comicios del 19 de marzo, tanto el FMLN como Cristiani, la Iglesia y hasta la propia Casa Blanca (reservadamente, según el rector de la Universidad Centroamericana, el sociólogo jesuita Ignacio Ellacuría, y a condición de que se le garantice que el FMLN no asumirá el poder), hayan expresado su voluntad de intentar nuevas negociaciones de paz. Pero la paz no es ni puede ser neutra. Implica la relativa institucionalización y el procesamiento de unas relaciones de fuerza en equilibrio inestable y profundos cambios en una estructura socioeconómica cuya franca obsolescencia data de hace al menos dos décadas. De ahí que las palabras no acompañen a los hechos.

¿Una nueva Arena?

En declaraciones al diario The New York Times, José Napoleón Duarte vaticinó (al 17/3/89, cuando se consideraba ya un hecho el triunfo de Arena) que una creciente polarización y un incremento del caos económico podrán conducir a una victoria de la guerrilla y consideró poco factible que su sucesor mantenga una política de centro. A su entender, Arena puede agudizar la represión e intensificar la guerra contra el FMLN, lo que «producirá una confrontación entre el gobierno y el pueblo y un aumento de la ayuda a los rebeldes hasta crear condiciones para una insurrección popular».

Por su parte, Cristiani aseguró en una entrevista publicada el 27 de marzo por la revista norteamericana Time que no reaparecerán los «escuadrones de la muerte» y que su padrino, el mayor Roberto D'Aubuisson, «seguirá desenvolviendo un rol importante en el partido y mantendrá su puesto como líder de Arena en la Asamblea Nacional» pero «no se convertirá en el número uno del partido y menos aún en el número uno del país». Prometiendo no permitir un nuevo baño de sangre, Cristiani expresó la necesidad de hacer «más eficiente» el aparato militar, que - dijo - se comportará con más «profesionalidad» en la guerra civil, y se pronunció a favor de «conversaciones privadas» con los rebeldes antes que por entablar negociaciones reales. En otra entrevista otorgada al semanario estadounidense Newsweek, insistió en que no permitirá «que las fuerzas armadas inicien una matanza», dijo que no otorgará amnistías a los rebeldes presos y reiteró que D'Aubuisson no detentará ninguna cartera ministerial en su gabinete, subrayando que se rodeará de «un equipo de profesionales y técnicos que crea en los principios del partido», aunque «las grandes decisiones se consultarán con todas las fuerzas sociales».

La posibilidad de que con Cristiani surja una «derecha moderna», lo que implicaría una transformación de la Arena, fue insinuada por el antes citado rector de la Universidad Centroamericana. Según Ignacio Ellacuría (La Jornada, de México, 22/3/89), el nuevo gobierno reconducirá los recursos salvadoreños hacia el gran capital y mantendrá un nivel de negociación con la guerrilla análogo al que sostuvo el gobierno de Duarte, aunque con mayor consistencia, porque la línea de la Arena está más decantada que la democristiana, marcada por la ambigüedad. El sociólogo jesuita considera viable el nacimiento de una derecha menos conservadora, «moderna», como resultado de una confluencia entre las bases de Arena y la Democracia Cristiana, y opina que de prosperar una negociación de paz, el panorama político sufriría un cambio profundo, pues se integraría a la lucha electoral el FMLN, que se vería obligado a adoptar una característica mucho más plural y democrática, la que le garantizaría convertirse en una alternativa. Ellacuría subrayó que las encuestas previas a los comicios realizadas por la Universidad Centroamericana (que vaticinaron con gran exactitud los resultados del escrutinio) demostraron que el 59% de los interrogados - un índice apenas inferior al de los ciudadanos que no votaron - estaban de acuerdo en postergar las elecciones hasta septiembre, como proponía el FMLN, por lo que no le extrañó el alto porcentaje de abstención, superior al de los comicios precedentes, calificándolo de «tremendo fracaso» del régimen. Añadió que la Arena no aumentó su caudal respecto de elecciones anteriores y que su triunfo se debe a la debacle de la Democracia Cristiana, lo que hace que la Arena no pueda gobernar sola (pese a su control de los medios y de las finanzas) porque, en realidad, «el mandato que recibió refleja una voluntad abierta-

mente minoritaria». Para el académico, una alianza clara entre la Arena y sectores de la DC (el nombre del disidente Adolfo Rey Prendes, del Movimiento Auténtico Cristiano, suena para canciller), con el apoyo decidido de los Estados Unidos, «podría superar el endurecimiento de los militares». Nacería así una nueva Arena desde el propio gobierno de Cristiani: tecnocrática, selectivamente represiva y hasta cierto punto negociadora.

El frente rebelde

Aunque la fisura entre el FMLN y el FDR (Convergencia Democrática) - que encarnaron dos tácticas contradictorias ante los comicios - parece más coyuntural que estratégica, la nueva fase abierta en El Salvador estaría destinada a desencadenar un amplio debate y una revisión crítica en el frente rebelde.

Conservando la iniciativa política y la confianza en sus propias fuerzas, el FMLN se apresuró a anunciar una nueva propuesta de negociación al gobierno de Arena. La comandante Ana Guadalupe Martínez, de la Comisión Político Diplomática, declaró en México a la agencia española EFE (20/3/89) que el elevado índice de abstención era «una prueba de que ningún partido podrá gobernar sin negociar con el FMLN», así como «una muestra de la capacidad de veto de la insurgencia». Dijo que el triunfo de Arena, «que reveló la incapacidad política de la DC para gobernar en El Salvador, tiene su lado positivo, puesto que obligará a la democracia cristiana a pasar a la oposición y así reforzar el bloque de las fuerzas políticas por la paz». Ello - agregó «intensificará la presión por encontrar una salida negociada, a la vez que podría ayudar a frenar el avance de los sectores de ultraderecha».

La comandante destacó que los resultados electorales «reflejan que la mayoría de los salvadoreños apoyan la propuesta de negociación y paz presentada por el FMLN en enero para postergar los comicios y garantizar su legitimidad», y descartó una reactivación de los «escuadrones de la muerte», puesto que «la realidad política que vive actualmente El Salvador derrotaría esa alternativa». En otra entrevista (Reuter, 24/3/89), Ana Guadalupe Martínez sostuvo que «es más fácil hablar con alguien que es claramente enemigo que con un gobierno como el de Duarte, que permanentemente estaba cambiando de opinión». La misma agencia citó a una fuente rebelde señalando que «si no hay negociación, el pueblo verá claramente quiénes son los enemigos de la paz y entonces sí se va a producir la guerra total».

Un comunicado de la Comandancia General del FMLN difundido en México el 21 de marzo destacó que «Cristiani sabe bien que no puede cumplir y que no va a

cumplir» sus promesas electorales, y que «su misión es sustituir» al gobierno de la DC «como instrumento de una guerra sucia contra el pueblo». El documento afirmó que Arena «llega al gobierno en condiciones de mucha mayor debilidad y desventaja que Duarte en 1980 y 1984» y llamó a los partidos políticos salvadoreños «a formar un bloque de fuerzas que presione en forma conjunta en favor de una solución negociada, sin excluir a la democracia cristiana». En la reunión de prensa donde se difundió el comunicado, los representantes de la insurgencia establecieron dos ejes fundamentales de la negociación propuesta: la conformación y naturaleza de las fuerzas armadas y el modelo de desarrollo económico. Añadieron que los comicios significaron «un reencuentro de la oligarquía y la dictadura militar» pero abren «mejores posibilidades reales de negociación, porque este gobierno estará más aislado internacionalmente, con los canales de financiamiento de su aparato militar y productivo obstruidos, y ello los obligará a abrir espacios».

En cuanto a los magros resultados de la Convergencia Democrática, Ana Guadalupe Martínez advirtió que su papel, «extraordinariamente valioso para propiciar el debate en favor de una negociación, debe ser visto más allá del contexto del 19 de marzo, en una perspectiva más amplia». Reduciendo a sus justos términos la fisura surgida en el frente rebelde (y que tuvo expresión pública en las declaraciones del candidato Guillermo Ungo atribuyendo al boicot guerrillero su escasa votación), expresó que la Convergencia Democrática es ya «una fuerza nacional con posibilidades de expresión y capaz de aglutinar a los sectores que no coinciden con el FMLN, pero sí con nuestros objetivos de paz y democracia, gracias a lo cual el FMLN ya no es el único referente para la oposición en El Salvador». La dirigente guerrillera no descartó el peligro de un golpe militar en la presente coyuntura, al señalar que la unidad interna del ejército puede quebrarse como resultado de un enfrentamiento entre el sector que apoya a Arena y el que mantiene su adhesión al proyecto democristiano.

Los militares

Días después, el 27 de marzo, el comandante Salvador Guerra, miembro de la dirección del FMLN, declaró a la agencia Salpress que «hay un sector democrático en el ejército al que debemos apoyar y reforzar en medio de esta tremenda crisis que invade a los militares, cuyas divisiones políticas e institucionales se agravarán con la llegada de Arena al poder». El comandante del FMLN distinguió tres sectores: los pronorteamericanos impulsores de la alianza DC-militares, los que han venido apoyando a Arena y el que denominó «grupo de oficiales democráticos», que «plantean la necesidad de darle más espacio al juego político y en definitiva se

oponen a continuar la guerra». Y añadió: «Es imprescindible evitar que prenda el planteamiento de la guerra total en las filas castrenses, por lo que se hace indispensable apoyar a este sector 'democrático'». Y concluyó: «El ejército puede y debe autodepurarse, porque en sus filas los criminales que masacran a la población civil desarmada son una minoría; por ahora se cerró el espacio: esperamos abrirlo nuevamente a fin de avanzar en la solución política negociada».

Pero más allá del sentido táctico de estas declaraciones y de su fundamento real, lo innegable es que en estos años de guerra la cúpula militar desarrolló intereses corporativos propios (ligados al flujo de la «ayuda» norteamericana, fuente de privilegios y corrupción, así como de una considerable cuota de poder) y reforzó un elevado nivel de autonomía. Todo intento negociador chocará con la oposición de las fuerzas armadas regulares y el propio Cristiani, cuya trayectoria se reduce a dos campañas electorales y un año como diputado, deberá enfrentar su resistencia si quiere dialogar con el FMLN. Por eso alterna su reconocimiento de la necesidad de negociar con apelaciones a la ilusión de un triunfo militar, si la insurgencia «vuelve con sus planteos inaceptables». Al mostrarse dialoguista busca no debilitar el apoyo de los Estados Unidos (que no confían en la posibilidad de una victoria bélica inmediata) y al amenazar al FMLN trata de conformar a los «duros» de la Arena, liberados por el coronel Ochoa Pérez y el mayor D'Aubuisson, para quienes negociar es rendirse y que cuentan con el apoyo de los saca dólares del llamado «Grupo Miami», miembros de la oligarquía tradicional que financiaran la campaña.

Las incógnitas

El poder es por naturaleza «pragmático» y si Cristiani pretende resultados diferentes que su antecesor, tendrá que crear su propio margen de maniobra, su propio staff «pragmático», ensanchando la franja que le dejen las presiones opuestas de la Casa Blanca y los «duros» de la Arena y bajo el previsible hostigamiento de los democristianos. Recién entonces podrá pensar en una eventual negociación con el frente democrático-revolucionario, que entretanto habrá seguido ganando espacio político y militar.

Si el nuevo presidente investiga, como prometió, los negociados de la burocracia democristiana (de los que fue cómplice buena parte de la oficialidad) chocará con el ejército. Si agrava las violaciones de los derechos humanos y desbarata las tibias reformas iniciadas y estancadas bajo la gestión de Duarte, amenazará el consenso bipartidario norteamericano y el apoyo indispensable de la Casa Blanca, sin el cual el régimen es incapaz de sostenerse. Si, por el contrario, mantiene las reformas (ya

desairó a los sectores algodonero y cañero al anunciar que no dará marcha atrás en la reforma agraria, que los afectó preferentemente, pese a que lo respaldaron en la campaña electoral) y si no incrementa la represión, el sector «duro» de Arena se sentirá traicionado y podrá reactivar las estructuras paramilitares conocidas como «escuadrones de la muerte», generando el cuadro insurreccional vaticinado por Duarte en sus declaraciones antes citadas. Al revés que su predecesor democristiano, el nuevo presidente no podrá culpar a la ultraderecha (que él encarna) de las nuevas masacres.

En el ámbito centroamericano, y no obstante su declarada voluntad de respetar los Acuerdos de Esquipulas, la soledad de Cristiani no es menos patética. Por una parte, Arena (y en particular el «Grupo Miami») conservan estrechos lazos con el núcleo más intransigente de la contra nicaragüense. Por otra parte, en medio de la creciente distensión entre la revolución sandinista y sus vecinos, ni Cristiani ni Arena cuentan con la simpatía del democristiano Vinicio Cerezo, de Guatemala; del socialdemócrata Oscar Arias, de Costa Rica, o del liberal José Azcona Hoyo, de la fronteriza Honduras.

El ascenso de Cristiani trastorna la correlación de fuerzas regional de un modo imprevisible, que depende, en última instancia, de su capacidad y de su voluntad política para negociar con el FMLN. Con el control de los tres poderes del Estado y la mayoría de los municipios (que no tenía el gobierno de Duarte) se diría que está en condiciones más favorables para emprender el diálogo, así lo hiciera con exclusivas intenciones dilatorias, de manipulación engañosa, si no fuera porque su partido, la Arena, considera que sentarse a la mesa con los rebeldes equivale a capitular.

De ahí que el FMLN se encuentre en una situación tan sutilmente favorable como delicada. Al igual que hace una década, cuando comenzó la guerra, la oligarquía tradicional, que alimentó las causas de su desencadenamiento, maneja nuevamente las riendas del poder político con los democristianos y los socialdemócratas en la oposición. Pero ahora, la insurgencia revolucionaria constituye una enorme fuerza, no sólo militar, sino también (potencialmente) política. Lo demuestran los índices de abstención electoral y de coincidencia con su propuesta de postergar los comicios, pero lo han estado poniendo aún más de manifiesto durante los últimos cuatro años las movilizaciones sindicales, estudiantiles y por los derechos humanos protagonizadas por las organizaciones populares de masas.

La articulación y el remate político de todo este conjunto de factores - cuyas vías pueden ser de lo más variadas y combinar disímiles formas y niveles de lucha - constituye el verdadero desafío de la hora para los revolucionarios salvadoreños.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 101 Mayo-Junio de 1989, ISSN: 0251-3552, **<www.nuso.org>.**